

C.A. de Santiago

Santiago, veinte de julio de dos mil veintidós.

Vistos y considerando:

Primero: Que el reclamo de ilegalidad se dirige por Gasco GLP S.A., en contra de la Resolución Exenta Electrónica N° 10527, de 18 de enero de 2022, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) que la sanciona con una multa equivalente a cuatrocientos Unidades Tributarias Mensuales (400 UTM), Resolución Exenta en contra de la cual la reclamante interpuso recurso de reposición, el que fue rechazado mediante Resolución Exenta N° 351138/, de 21 de febrero de 2022, notificada el 11 de marzo de 2022.

Segundo: Que el reclamo de ilegalidad atribuye a la Resolución Exenta impugnada diversos errores de derecho en el razonamiento que condujo a la SEC a desestimar el recurso de reposición antes singularizado, a su juicio, por errónea interpretación de los hechos, incurriendo la reclamada SEC en una infracción ilegal, al sancionar a Gasco GLP S.A. por almacenar en su instalación de GLP, ubicada en calle Los Carrera N° 1288, Los Angeles, una cantidad de cilindros GLP, superior a la capacidad declarada a la fecha de la fiscalización por SEC, infringiendo de esa forma el artículo 136° del Decreto Supremo N° 108 de 2013, del Ministerio de Energía.

Indica el recurrente, en cuanto a los hechos establecidos y fundamentos de derecho, que según el contenido de la Resolución Exenta N° 10.527, de 18 de enero de 2022, de la SEC, son los siguientes:

"Que con fecha 30.06.2021, esta Superintendencia a través de su casilla virtual, recibió la solicitud de inscripción de un almacenamiento de cilindros GLP de propiedad de Gasco GLP S.A. en calle Los Carrera N° 1288, comuna de Los Angeles, detallando una capacidad de 3000 kg.

Que revisados los antecedentes disponibles en esta Superintendencia, el almacenamiento de calle Los Carrera, Los Angeles, cuya propiedad y operación corresponde a Gasco GLP S.A. contaba con inscripción



anterior, de fecha 06.08.2018, con capacidad de almacenamiento de esa fecha de 500 kg.

Que con fecha 13.07.2021, fiscalizadores de esta Superintendencia, procedieron a fiscalizar el almacenamiento en comento, conforme a los antecedentes ingresados el día 30.06.2021. Constatado que el almacenamiento se encontraba operativo con cilindros tipo 2,5 kg, 5 kg, 11 kg, 15 kg, y 45 kg, que supera los 2.700 kg de gas licuado petróleo almacenado, sin contar aún con una inscripción que avalara dicha cantidad.

Que, analizados los antecedentes disponibles, a juicio de esta Superintendencia existen antecedentes suficientes para estimar que la empresa Gasco GLP S.A., como propietario y operador del almacenamiento de cilindros ubicado en Los Carrera N° 1288, Los Angeles, almacenó una cantidad de cilindros de GLP superior a la capacidad declarada a la fecha de la fiscalización por parte de esta Superintendencia, dado que la presentación de fecha 30.06.2021, no contaba con la inscripción de parte de este Organismo Fiscalizador, por lo cual se infringió el artículo 136°, del Decreto Supremo N° 108 de 2013, del Ministerio de Energía.

Que mediante Oficio ORD N° 230, de fecha 23.07.2021, se formularon cargos a la empresa distribuidora Gasco GLP S.A., por la infracción descrita en el Considerando 4° de la presente Resolución, otorgándose un plazo de 15 días hábiles, a contar de la fecha de la notificación del citado oficio, para presentar por escrito los descargos a que tiene derecho.

Que ampliamente vencido el plazo otorgado, la empresa Gasco GLP S.A., no presentó descargos. Sin perjuicio de ello, la afectada podrá hacer valer sus alegaciones o reiterar las presentadas fuera de plazo mediante la interposición del correspondiente recurso de reposición, acompañando a dicho escrito los medios probatorios que estime pertinentes para acreditar su defensa.

Que, analizados los antecedentes disponibles, en relación a este caso, se puede concluir lo siguiente:



Que, cumplido el plazo otorgado por este Organismo Fiscalizador, la Empresa Gasco GLP S.A., no ha presentado ningún antecedente que permita desvirtuar los cargos formulados en su contra.

Que, por lo tanto, no encontrándose controvertidas la existencia de la infracción enunciada en el Considerando 4º, corresponde hacer efectiva la responsabilidad infracciones de la empresa Gasco GLP S.A.

Que, en este caso, la empresa Gasco GLP S.A. abasteció un recinto de gas, por sobre su capacidad inscrita, de 500 kg. Sin haber contado con la inscripción que la habilitara para abastecer una capacidad superior. A La Luz de lo dispuesto en el artículo 13 del DS 108, de 2013, del Ministerio de Energía.

Que, al momento de dictar la presente resolución se han tenido en cuenta las circunstancias establecidas en el artículo 16º de la Ley N° 18.410, de 1985 y la sanción que corresponde aplicar está en directa relación a la naturaleza de la infracción cometida.

Que, al momento de dictar la presente Resolución, se han considerado todas las circunstancias establecidas en el artículo 16º de la Ley 18.410, de 1985. En tal sentido, se debe dejar expresa constancia que al momento de resolver se deberá considerar lo que a continuación se indica:

En relación a la importancia del daño causado o del peligro ocasionado, se ha de señalar que la operación del almacenamiento de cilindros GPS de la empresa Gasco GLP S.A, con una capacidad superior a la declarada formalmente a la fecha de la inscripción SEC, no cuenta con las garantías ni condiciones de seguridad garantizada para las personas y cosas, asociadas a la instalación. En relación al porcentaje de usuarios afectados por la infracción, señalar que no generó afectación a usuarios y operadores. Sin embargo, las condiciones de riesgo observadas afectaban a los usuarios del establecimiento.

En relación al beneficio económico derivado de la infracción, se debe asumir que la venta de gas licuado envasado de Gasco GLP S.A., en dicho almacenamiento, le reportó un beneficio económico para la



infractora, en contra del estándar de seguridad exigido en normativa invocada en los cargos formulados.

En relación a la intencionalidad y grado de participación del infractor en el hecho investigado, se debe concluir que la decisión de operar un almacenamiento con una capacidad superior a la inscrita a la fecha de la fiscalización es una decisión de completo dominio y decisión de la empresa Gasco GLP S.A.

En relación a la capacidad económica de la infractora, se debe indicar que el valor de la multa se encuentra dentro de los rangos para no afectar la operación de la empresa distribuidora de gas."

Tercero: Que el reclamo sostiene que los hechos establecidos en la instancia administrativa no han ocasionado daño alguno y tampoco peligro para las personas o cosas, dado que, al momento de la fiscalización realizada por el personal de SEC, en el recinto de almacenamiento de los cilindros de gas licuado, las obras asociadas al incremento de la capacidad de almacenamiento ya habían sido ejecutadas y el local ya contaba con las instalaciones para poder almacenar una capacidad mayor, sin generar riesgos para las personas y las cosas.

Indica, además, en cuanto a los hechos, que la situación no generó un riesgo para el personal que operaba en la instalación, dado que la jaula del almacenamiento estaba diseñada para una mayor capacidad. Y, agrega, la SEC sabía que el recinto de almacenamiento finalmente fue inscrito con fecha 26 de julio de 2021, a los pocos días después de la fiscalización realizada por SEC.

Además, en relación con los hechos, propone el reclamo que, si bien Gasco GLP S.A. en su calidad de sociedad anónima tiene fines de lucro y su actividad comercial le reporta beneficios económicos, las ventas en los locales de almacenamiento reportan un beneficio directo al operador de éstos, dado que en su calidad de minorista es quien comercializa directamente al consumidor final y que el beneficio de Gasco GLP S.A. está dado por las compras que hacen los distribuidores minoristas a Gasco GLP S.A. para su posterior reventa. Afirma, que en



este caso particular se debe tener presente que no es considerable el beneficio económico dado que la capacidad de almacenamiento del recinto es bastante limitada.

En consecuencia, afirma, en cuanto a las infracciones de ley denunciadas, el reclamo se estructura sobre la base de que la sanción impuesta por SEC considera todas las circunstancias establecidas en el artículo 16° de la Ley 18410, sin embargo, no se dan los sustratos fácticos de la importancia del daño causado o del peligro ocasionado, en relación con el porcentaje de usuarios y operadores afectados por la infracción pues no los hubo y en relación con los beneficios económicos reportados por la infracción a Gasco GLP S.A., en cuanto estos no son considerables.

Por un segundo aspecto de infracción de ley, el recurso denuncia que no existe proporcionalidad en la sanción de multa aplicada por SEC, de acuerdo a los criterios y circunstancias establecidas en la ley y, por lo tanto, denuncia que ha habido de parte del órgano fiscalizador una aplicación ilegal de las normas atinentes al monto del castigo pecuniario.

Así, sostiene el recurso, los hechos materia de la infracción dispuesta por la SEC, no han ocasionado daño alguno y tampoco peligro para las personas o cosas, dado que, al momento de la fiscalización realizada al establecimiento por parte del personal fiscalizador de SEC, el recinto de almacenamiento de cilindros en relación con las obras asociadas al incremento de la capacidad ya había sido ejecutadas, lo que al fiscalizar el personal de SEC pudo constatarlo personalmente. Por lo que la capacidad de almacenamiento inscrita en SEC de 500 kg, en los hechos el local contaba con las instalaciones para poder almacenar una capacidad mayor, sin generar riesgos o daños para las personas o cosas. Sin embargo, afirma, estos antecedentes no fueron tenidos en cuenta por SEC al dictar la resolución reclamada, ni tampoco al resolver la reposición interpuesta por Gasco GLP S.A. Por consiguiente, añade, tampoco la situación generó un riesgo para el personal que operaba en la instalación.



Adicionalmente, asevera que, si bien Gasco GLP S.A. en su calidad de sociedad anónima tiene fines de lucro, el beneficio económico en este caso en particular no es considerable, dado que la capacidad de almacenamiento del recinto es bastante limitada.

Señala que, no obstante todas las alegaciones vertidas y los antecedentes que se han acompañado, SEC se limitó a imponer una sanción ascendente a 400 UTM, sin tener en cuenta una adecuada interpretación y aplicación de las circunstancias que la regulación económica establece, para la debida aplicación de la sanción pecuniaria que efectivamente correspondía imponer.

Indica por este capítulo que SEC en la resolución impugnada concluye que, de conformidad al artículo 15° de la citada Ley N° 18.410, las infracciones por las cuales se formulan cargos califican como faltas graves.

Agrega que para determinar la aplicación de la multa que se impone a Gasco GLP S.A., se hace por parte de SEC una interpretación y una aplicación equivocada del artículo 16° de la Ley N° 18.410, determinadamente:

1. La importancia del daño causado o del peligro ocasionado. Criterio que exige que se considere en la aplicación de la sanción el “daño causado o el peligro ocasionado”, es decir, se trata de un daño o peligro concreto, y no simplemente abstracto como se desprende al interpretar este caso. Afirma que, al no haberse acreditado el daño (sic) o peligro concreto que exige la imposición de la sanción, es posible colegir que no se cumple con este primer criterio para poder aplicarla.

2. El porcentaje de usuarios afectados por la infracción. Asegura que no existen en la especie usuarios afectados en concreto.

3. El beneficio económico obtenido con motivo de la infracción. Asevera que no ha existido para Gasco GLP tal beneficio económico.

4. La intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la misma. Manifiesta que en modo alguno existió intencionalidad directa o dolo en el proceder por parte de la empresa.



5. La conducta anterior. No existen conductas previas de un incumplimiento por parte de la compañía en el recinto fiscalizado por la SEC.

Finaliza el reclamo de ilegalidad sosteniendo que, por este aspecto de infracción de ley, en la especie, está acreditado que no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 16º, de la Ley N° 18.410, para poder determinar la correcta aplicación de la sanción pecuniaria de 400 UTM, fijada en la Resolución Exenta N° 10.527, por lo que cabe concluir que la aplicación de dicha sanción y su monto resulta ser arbitraria e ilegal, por lo que solicita que el reclamo sea acogido en todas sus partes y, por consiguiente, se deje sin efecto la resolución reclamada de SEC. En subsidio, solicita se rebaje sustancialmente la multa impuesta o bien se sustituya por una amonestación por escrito, de conformidad a las circunstancias acreditadas en autos, o lo que la Corte determine, con costas.

Cuarto: Que al informar la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, (SEC), indica que la instalación de almacenamiento de GLP, de propiedad y operada por Gasco, se rige en materia de seguridad por las disposiciones del Decreto Supremo N° 108, de 2013, del Ministerio de Energía, que dispone en su artículo primero que: "Este reglamento establece requisitos mínimos de seguridad que deberán cumplir las instalaciones de gas licuado de petróleo, en adelante "GLP", en las etapas de diseño, construcción, operación, mantenimiento, inspección y término definitivo de operaciones, en las cuales se realizarán las actividades de almacenamiento, envasado, transporte, transferencia, distribución y abastecimiento de GLP, así como las obligaciones de las personas naturales y jurídicas que intervienen en dichas actividades, a objeto de desarrollarlas en forma segura, controlando el riesgo de manera tal que no constituyan peligro para las personas o las cosas".

Enfatiza SEC que entre tales disposiciones de seguridad se encuentra el artículo 136º de la Ley N° 18.410, que prescribe que: "la cantidad total de GLP existente en los Almacенamientos de Cilindros,



en Cilindros Portátiles Llenos, no deberá ser superior a la capacidad declarada ante la Superintendencia”.

Precisa SEC que el Reglamento establece los requisitos mínimos de seguridad para desarrollar dichas actividades, controlando el riesgo de manera tal que éstas no constituyan peligro para la persona y/o cosas. Sin embargo, asevera, la reclamante Gasco GLP S.A. a sabiendas que solo podía almacenar 500 kilos de GLP en su instalación de calle Los Carrera N° 1288, comuna de Los Angeles, superaba extensamente al momento de fiscalización, pues se estableció que almacenaba cilindros de 2.5 kg, 5 kg, 11 kg, 15 kg y 45 kg, que superaba los 2.700 kg de gas licuado petróleo almacenado, sin contar aún con una inscripción que avalara dicha capacidad.

Señala que la falta sancionada ha sido calificada como infracción de carácter grave, al constatarse un exceso de almacenamiento de GLP de un 400%, respecto de la capacidad autorizada por un tiempo indeterminado.

Agrega que, existe un reconocimiento expreso por parte de la recurrente de la existencia de la infracción, pero que se desconoce por cuanto tiempo permaneció en dicha situación anti reglamentaria, incumpliendo con las obligaciones que tiene como propietaria y operadora de la instalación GLP, que la obligan a velar por la correcta operación, mantenimiento e inspección de las instalaciones de GLP, a objeto de desarrollar las actividades en forma segura, controlando eventuales riesgos que la operación presente para las personas o las cosas, lo que no ocurrió en la especie.

Acerca de la supuesta falta de proporcionalidad del monto de la multa, indica que la calificación de grave de la infracción se ha efectuado de conformidad al artículo 15°, N° 1 de la ley 18.410, porque las irregularidades establecidas conllevan peligro potencial e inminente para la seguridad o salud de las personas en los términos previstos en el citado precepto, siendo esa precisamente la consideración que ha tenido el legislador para tipificar las conductas como infracción.



Por este aspecto, agrega SEC, el artículo 16° A de la Ley N° 18.410, faculta a la Superintendencia para sancionar las infracciones graves con una multa de 5.000 UTA, es decir, 60.000 UTM, por lo que, a su juicio resulta evidente que la multa impuesta de 400 UTM, no solo es consistente con la magnitud de las infracciones, la participación de la reclamante en los hechos y su capacidad económica, sino también con las consideraciones expresadas y hechas valer en sus descargos, en cuanto acepta los hechos.

En razón de las consideraciones expuestas y de los antecedentes que sirven de base al acto administrativo reclamado, indica SEC que no se advierte cómo el acto recurrido pudiera importar violación de las garantías, principios y normas invocados por la recurrente, por lo que a su juicio procede que la acción judicial de reclamo deducida por Gasco GLP S.A., sea rechazada en todas sus partes por ser infundada y carecer de sustento válido para su interposición, con costas.

Quinto: Que el reclamo de ilegalidad de la Ley N° 18.410, es de derecho estricto, sin que el juez pueda variar la fijación de los hechos contruidos en sede administrativa, adecuándose el procedimiento ante la autoridad administrativa a lo dispuesto en el Decreto N° 119, de 1989, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, cuyo Título II, fija las reglas y formalidades que han de observarse al efecto en los términos de un justo y racional procedimiento.

Sexto: Que, previo al examen de los dos grupos de infracciones que se han dejado señalados como fundamentos del reclamo de ilegalidad, materia de este fallo, es útil consignar que los hechos acreditados en la resolución terminal en contra de la cual se interpone son:

a) Según consta de los antecedentes SEC en el ejercicio de sus funciones tomó conocimiento de los hechos por medio de sus fiscalizadores, luego que, en forma previa a la declaración de una nueva solicitud de registro para nueva inscripción de almacenamiento de cilindros de GLP, de propiedad de la reclamante Gasco GLP S.A., en calle Los Carrera N° 1288, comuna de los Angeles, detallando una



capacidad de 3.000 kg., revisados los antecedentes se comprobó la autorización para el almacenamiento en el local de calle Los Carrera N° 1.288, Los Angeles, cuya propiedad y operación es de propiedad de la reclamante Gasco GLP S.A., contaba con una inscripción anterior de fecha 06 de agosto de 2018, con capacidad de almacenamiento de límite 500 kg., desde esa fecha.

b) De esta forma, según los antecedentes, los fiscalizadores de SEC, en forma previa a la declaración de la nueva solicitud de registro, procedieron fiscalizar el almacenamiento de calle Los Carrera N° 1.288, constatando su funcionamiento con cilindros tipo 2,5 kg, 5 kg., 11 kg, 15 kg., y 45 kg. que superaba los 2.700 kg de gas licuado petróleo almacenado, sin contar aún con una inscripción que avalara dicha capacidad, pues solo contaba con autorización para almacenar 500 kg.

Séptimo: Que, en consecuencia, los antecedentes, daban cuenta que la reclamante Gasco GLP S.A., como propietario y operador del almacenamiento de cilindros ubicado en calle Los Carrera N° 1288, Los Angeles, almacenaba una cantidad de cilindros de GLP superior a la capacidad declarada a la fecha de la fiscalización por parte de SEC, dado que la solicitud de fecha 30 de junio de 2021, no contaba con la inscripción de parte de ese organismo fiscalizador, y así la autoridad fiscalizadora estimó que se infringía el artículo 136° de Decreto Supremo N° 108 de 2103, del Ministerio de Energía, que aprobó el "Reglamento de Seguridad para las Instalaciones de Almacenamiento, Transporte y Distribución de Gas Licuado de Petróleo y Operaciones Asociadas", que dispone: "La cantidad total de GLP existente en los Almacenes de Cilindros Portátiles llenos, no deberá ser superior a la capacidad declarada ante la Superintendencia". Por su parte el artículo 150°, ordena: "Toda instalación de GLP nueva, previo puesta en servicio, y aquellas existentes que hayan experimentado alguna modificación, deberán ser inscritas ante la Superintendencia".

Octavo: Que, por lo anterior, se establece que SEC, ponderando dichos antecedentes formuló cargos, dando traslado a Gasco GLP S.A., mediante Oficio Ordinario N° 230, de fecha 23 de julio de 2021, en los



que se individualizó a la compañía presunta infractora, se enunciaron de manera clara y precisa los hechos constitutivos de las infracciones a las disposiciones del Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N° 108 de 2013, del Ministerio de Energía, expresándole el plazo que tenía para formular por escrito sus descargos, de quince días hábiles prorrogables por una sola vez, contado desde la fecha de la notificación.

Noveno: Que, sin embargo, emplazada la reclamante Gasco GLP S.A., ésta no formuló descargos y, por consiguiente, lógicamente no los contravirtió, no ofreció ni rindió prueba alguna respecto de los hechos que refiere posteriormente en el reclamo de ilegalidad, como fundamentos de las infracciones de derecho que denuncia.

Por su parte, en su oportunidad, la Dirección Regional de SEC, dando fundamentos, resolvió confirmar los cargos, dictando la Resolución Exenta N° 10.527, de 18 de enero de 2022, mediante la cual impuso a la reclamante la multa de 400 UTM, resolución que fue impugnada en sede administrativa mediante recurso de reposición, el que fue en definitiva rechazado mediante Resolución Exenta N° 3.513, de 21 de febrero de 2022, respectivamente.

Décimo: Que el modelo del sistema escogido para la revisión de las sanciones eléctricas y de combustibles, establecido en la Ley N° 18.410, es que ellas son impuestas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), con la posibilidad, ante la Corte de Apelaciones respectiva, de impugnar la decisión de sanción, por medio de un contencioso administrativo de nulidad, según los incisos primero y segundo del artículo 19 de la citada ley, desde luego, a través del presente reclamo de ilegalidad, el que como se ha señalado anteriormente en este fallo, es de derecho estricto, en el sentido que la Corte no puede variar la fijación de los hechos en que ya la sanción en sede administrativa fue construida, ni adicionar hechos ni pruebas nuevas, salvo excepcionalmente, como facultad del tribunal, para acreditar el error de derecho que motiva el reclamo.

Cabe recordar que la SEC, al formular cargos en sede administrativa tiene la carga de la prueba respecto de los hechos que



establecen la existencia de la infracción y ante la contestación de los cargos, abrirá el término probatorio correspondiente. Todo lo cual corrobora que la sede administrativa es donde deben quedar probados definitivamente los hechos.

Undécimo: Que, en consecuencia, respecto al primer capítulo de infracción legal en que sustenta el reclamo, en lo referente a los vicios en que habría incurrido SEC en la aplicación del artículo 16º de la Ley Nº 18.410, el propio modelo de revisión instaurado por dicha ley no contiene la posibilidad que, por vía del reclamo de ilegalidad, se puedan alegar hechos o circunstancias que no fueron materia de lo discutido en sede administrativa, pues el reclamo de ilegalidad sería un nuevo procedimiento de hecho y de derecho, en el que la parte podría reservar su defensa para esta etapa de revisión judicial, lo que va en contra del principio del agotamiento previo al reclamo de ilegalidad de la vía administrativa y el de derecho estricto del arbitrio, en base a los cuales dicha ley se ha construido en materia sancionadora.

Duodécimo: Que, por consiguiente, si la reclamante Gasco GLP S.A., debidamente emplazada, no se hizo parte en sede administrativa, y por lo tanto, no hizo descargos, y en ella no acompañó, ofreció o solicitó pruebas o diligencias que haya considerado procedentes a su defensa, allegando antecedentes de hecho que sirvieran de fundamento ante la formulación de cargos, de esa forma, al no haber cumplido con el deber de contradecir los hechos en que aquellos se sustentaban, no puede ahora esta parte, por vía del reclamo de ilegalidad especialmente previsto en la Ley 18.410, incorporar en esta tramitación, tal etapa del procedimiento administrativo ya terminado, desde que, como se ha analizado, los fundamentos del reclamo de Gasco GLP S.A., según se aprecia de su texto, incorporan en sus basamentos aspectos de hecho que son nuevos y que serían necesarios establecer para enseguida considerar los supuestos errores de derecho que se denuncian, lo que desde luego no cabe en este reclamo que es de derecho estricto.

Décimo Tercero: Que, por el contrario, en la sede administrativa SEC cumplió con la obligación de demostrar la ocurrencia de los hechos



que configuran la infracción impuesta, agotando los medios disponibles para verificar que dicha transgresión fue efectivamente cometida, de qué modo ocurrió y quién es el responsable de su realización (Corte Suprema, "Transelec con SEC". 2019.), por lo que, como puede advertirse, la sanción impuesta no importó una simple afirmación de SEC carente de fundamentación, como lo expresa el reclamo, ya que el organismo fiscalizador al sancionar, apreció adecuadamente tanto hechos como el derecho, tal como consta de los antecedentes señalados en la resolución reclamada.

Décimo Cuarto: Que, como se puede apreciar, contrariamente a lo sostenido por la reclamante, el organismo fiscalizador no ha incurrido en error de derecho susceptible de ser enmendado mediante este reclamo de ilegalidad, porque la actividad administrativa contempló cuestiones de hecho que le correspondía exclusivamente conocer y ponderar, lo que cumplió respetando cada una de las garantías de la reclamante, sin que esta parte quisiera incorporarse e intervenir en ella, por lo que, a esta Corte, con posterioridad, no le corresponde hacer una incorporación de hechos nuevos, revisar luego los hechos y hacer una nueva calificación e interpretación jurídica, porque de hacerlo sería convertir el reclamo de ilegalidad en una instancia judicial que la ley no contempla. Por consiguiente, no se ha producido la infracción de derecho que el reclamo denuncia y éste debe ser desechado por este capítulo.

Décimo Quinto: Que en relación al error de derecho reclamado de falta de proporcionalidad del monto de la multa aplicada por SEC, cabe considerar que la infracción fue calificada de grave en relación con los hechos establecidos regularmente por esa autoridad fiscalizadora, entendiendo que de los antecedentes administrativos examinados, las irregularidades detectadas y que fueron acreditadas, significaban un peligro potencial e inminente para la seguridad o salud de las personas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15, número 1), de la Ley N° 18.410, que en lo atinente dispone:



“(…) Son infracciones graves, los hechos, actos u omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que, alternativamente:

1) Hayan causado lesiones que no sean las señaladas en el número 1) del inciso anterior, o signifiquen peligro para la seguridad o salud de las personas;(…)”.

Por su parte el artículo 16 A, número 2.- de la Ley N° 18.410, en lo atinente dispone:

“Sin perjuicio de las sanciones que establezcan leyes especiales, las infracciones tipificadas precedentemente podrán ser sancionadas con:

2.- Multa de hasta cinco mil unidades tributarias anuales, revocación autorización o licencia, comiso o clausura, tratándose de infracciones graves, de acuerdo con el artículo antes citado,(…)”.

Que, por consiguiente, de las disposiciones antes citadas queda claro que SEC no ha infringido el principio de proporcionalidad de la multa, como reclama Gasco G.L.P. S.A., si se razona que el máximo de ésta asciende a 5000 Unidades Tributarias Anuales, esto es, pudo alcanzar el límite superior de 60.000 Unidades Tributarias Mensuales, y ella fue impuesta en una cantidad de dinero equivalente a 400 Unidades Tributarias Mensuales, por lo que, en consecuencia, también por este capítulo de infracción de derecho, se rechaza el reclamo de ilegalidad en examen.

Y, visto, además, lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N° 18.410, **SE RECHAZA** la acción de reclamo de ilegalidad interpuesta por Gasco G.L.P. S.A. en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), con costas.

Regístrese y en su oportunidad archívese.

Redacción del Ministro señor Zepeda.

N° Contencioso Administrativo N° 137 -2022.-

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada por la Ministra señora Elsa Barrientos Guerrero y la Abogada



Integrante señora Sandra Ponce de León Salucci. No firma la Abogada Integrante señora Ponce de León por encontrarse ausente.



Pronunciado por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Jorge Luis Zepeda A., Elsa Barrientos G. Santiago, veinte de julio de dos mil veintidós.

En Santiago, a veinte de julio de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

